

La política ambiental comadreja

EDUARDO GUDYNAS

Se dice que una comadreja puede colarse en un gallinero, devorarse el contenido de un huevo, y, sin destruirlo, dejarlo vacío. De la misma manera hay políticas comadreja, que son sólo un cascarón para mirar, y que están vacías de contenido.

Esta comparación, basada en unos versos de Shakespeare, alude al uso de imágenes y propuestas al tiempo que se evitan los contenidos que desembocan en acciones concretas.

En América Latina uno de los mejores ejemplos de políticas comadreas son las propuestas ambientales de los gobiernos. El campeón de estas charadas fue posiblemente el ex-presidente brasileño F. Collor de Melo. Con una jugada inicial que desconcertó a todos, nombró a un renombrado ambientalista, José Lutzemberger, al frente de la agencia federal encargada de los temas ambientalistas, la Secretaría del Medio Ambiente. Fue sobre todo un gesto, un símbolo, en tanto Lutzemberger era un ácido crítico de los gobiernos y un militante contestatario. Pero las medidas concretas fueron pocas y débiles, y muchos de los problemas ambientales del país norteamericano se mantuvieron, o se agravaron. Lutzemberger finalmente renunció.

Un ejemplo más actual, y más cercano, es la gestión de María Julia Alsogaray al frente de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente Humano, de Argentina. Tachonada por declaraciones rimbombantes, amplios despliegues publicitarios e incluso una ofensiva en la eco-diplomacia internacional, la llamada "polifuncionaria" no ha logrado alcanzar medidas efectivas de envergadura en su gestión ambiental.

En Uruguay también hemos enfrentado una política ambiental comadreja, más preocupada por la publicidad y los símbolos que por las medidas concretas. Desde el nacimiento del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, se han sucedido un sinnúmero de declaraciones y programas, pero con acciones ausentes y contradictorias a los principios invocados. Entre los más repetidos ha estado el llamado a la participación ciudadana, aunque en los hechos se la limita y encorseta.

Algunos ejemplos recientes demuestran esto. Existen algunas comisiones mixtas, pero las notificaciones de las reuniones no llegan, llegan tarde o se traspapelan. A las ONGs se les adjudica un papel subsidiario, donde ellas deben brindar información y ayuda "desinteresadamente" a los jefes de turno. Una ilustración de esto fue la marcha de cierto diagnóstico de nuestras áreas naturales, realizado con la cooperación española y que excluyó una vinculación directa de las ONGs. En el mismo sentido, el proceso de la elección de los delegados ambientalistas a la Comisión Técnica Asesora en Medio Ambiente fue mediado y condicionado desde esa cartera. Finalmente, si bien ese ministerio ha estado dispuesto a asistir financieramente a la red de ambientalistas, lo ha hecho bajo condicionantes como la presencia de un observador gubernamental en sus reuniones.

De esta manera la gestión estatal ha enfatizado las medidas de control y encausamiento. Esta es una tendencia generalizada en América Latina. Por ejemplo, en Argentina, la ya citada María Julia Alsogaray confesaba al inicio de su gestión que todo lo que se hiciera en el tema ambiental "lo va a hacer la empresa privada, de modo

que lo que tenemos que hacer es fijar normas". Bajo esta óptica el Estado tiene un papel subsidiario, y se espera que los agentes económicos privados pasen a tener la iniciativa en materia ambiental.

Otro ejemplo de esta tendencia tuvo lugar cuando el ahora expresidente de la República, doctor Lacalle, asumió la presidencia de honor de una fundación, integrada por destacados empresarios, y dedicada a instalar reservas naturales privadas, mientras su gobierno no lograba implementar medidas efectivas de protección y manejo de esos mismos ecosistemas silvestres.

De esta manera se suman los gestos y las intenciones, pero los problemas no se resuelven. En el caso de la contaminación, nuestra cartera ecológicamente participa de la inauguración de estaciones de servicio pretendidamente ambientales, pero no se controlan las emisiones contaminantes de los automotores.

Otro tanto ocurre con la protección de áreas naturales. El Estado dirige un programa de tres millones de dólares para conservar los Bañados de Rocha a la vez que firma un decreto para construir un canal de dos kilómetros de ancho que los terminará drenando. Mientras en las reuniones internacionales se presenta aquel programa como una medida conservacionista del más rico patrimonio biológico del país, en Rocha los humedales siguen reduciéndose, y los bichos de nuestros bañados corren un riesgo cierto de extinguirse.

A esto se suma la tendencia recurrente de la jerarquía ministerial a que sus declaraciones públicas más severas sean sobre los temas ambientales globales, porque disertar sobre la reducción de la capa de ozono o el recalentamiento de la atmósfera no compromete a nadie. Pero nunca se habla con la misma energía acerca de la curtiembre del barrio que contamina el arroyo. Se dedicaron esfuerzos diplomáticos, en su momento, a que Montevideo se convirtiera en la sede de la Convención de Cambio Climático,

demostrando un inusitado interés en cumplir ese convenio internacional: terrible paradoja para el único país en América del Sur que no poseía un sistema de áreas protegidas, y que ni siquiera cumplía otros tratados internacionales, como el de Ramsar, que implica proteger los bañados del Este.

Es que en la política comadreja el símbolo prevalece sobre la acción. Las campañas de calcomanías, concursos fotográficos, y espectáculos artísticos son los medios privilegiados para demostrar que el gobierno está "actuando" en el tema ambiental. Pero ninguno de esos elementos resolverá nuestros problemas.

No quiero decir con esto que medidas como esas no sean importantes. Por el contrario, son fundamentales para sensibilizar al resto de la opinión pública y crear una amplia conciencia social de la relevancia del tema ambiental en el país. Pero la política comadreja se queda sólo en ese gesto: proclama el cese de la contaminación y la reconversión industrial, pero no actúa en consecuencia a esa proclama.

Más aún. Muchos de sus símbolos y mensajes antes se correspondían a un profundo compromiso ideológico de crítica a diversos aspectos de la sociedad industrializada, pero hoy se eluden las premisas ideológicas que esa crítica presupone. Entonces, cuando se pide el cese de la contaminación y la reducción de los niveles de consumo, no por ello se está presentando un cuestionamiento a la racionalidad de las sociedades industrializadas contemporáneas. Su ejemplo más extremo fue el de aquel primer ministro del ambiente, Raúl Lago, del batllismo radical, que empleaba los slogans del ambientalismo contestatario de los años setenta: "la pobreza es nuestro mayor problema ambiental".

Esta situación contrasta con lo que sucede en otros sectores de la política nacional, donde existen acciones explícitas. Más allá que se esté de acuerdo con ellas o no, en la agropecuaria o la industria se toman medidas de protección o liberalización, se priorizan

unos productos sobre otros, y así, sucesivamente, se encadenan medidas concretas.

Es que en el tema ambiental las medidas concretas son pocas y débiles. Se han intentado controles de contaminación, tratamientos de efluentes, rescate de algunos sitios naturales, y una incidencia a nivel de la educación. Pero la acción concreta es en gran medida suplantada por el discurso.

La política comadreja es un profundo anestésico social. Difunde la sensación de que se está actuando, y que las acciones abundan. Se crea la ilusión de un escenario imaginario, verde y limpio. Pero en los hechos esas

medidas no se materializan y los problemas ambientales se agravan.

Es precisamente esta distancia la que denuncia la opinión pública: la brecha entre lo que se dice y lo que se hace. Es la misma distancia que alimenta el descreimiento en la sociedad política. El cerrar ese abismo, saliendo del onirismo del símbolo, volviendo a transformar el escenario político en un ámbito de acción, constituye uno de los grandes desafíos del ambientalismo uruguayo.

EDUARDO GUDYNAS, uruguayo, es coordinador del Centro Latinoamericano de Ecología Social.

Los recursos del bosque costarricense. Información básica

J. ESCRIBANO, J. J. JIMÉNEZ Y A. MORERA

Nuestros bosques tropicales contienen una enorme cantidad de recursos naturales aptos para convertirse en importantes fuentes de ingreso y en base del desarrollo económico de las poblaciones que viven dentro o alrededor de ellos. Sin embargo, en Costa Rica tales poblaciones no los han valorado ni utilizado adecuadamente. El aprovechamiento de ellos se ha limitado casi nada más que a la madera. De 10.000 especies vegetales identificadas y conocidas en nuestros bosques sólo unas 300 son consideradas de importancia económica, y son consideradas así por ser maderables, o sea, utilizables para la construcción de viviendas, muebles, objetos artesanales, para la fabricación de papel y como leña y carbón.

Antes de la colonización española nuestros antepasados ya usaban las especies leñosas para construir sus instrumentos musicales,

viviendas, armas y herramientas. Pero sólo fue a partir de los años 40 de este siglo que se empezó a practicar significativamente la deforestación y se puso en peligro de extinción algunas especies. La cobertura boscosa de nuestro territorio pasó del 75% en 1940 al 29% en 1993. Y los bosques primarios con capacidad de producción forestal apenas alcanzan el 4% del territorio, o sea, unas 200.000 hectáreas. Fueron el incremento poblacional, la creciente expansión de la frontera agrícola y la legislación agraria, aunados, los que generaron la deforestación; y fue el mercado, con su mandato de extraer sólo unas pocas especies del bosque, las especialmente trabajables, finas, duras y resistentes a la pudrición, lo que produjo el creciente riesgo de extinción de las mismas.

Nuestros bosques han sido aprovechados sin ningún control técnico, ni planificación ni